

## Capítulo 5

# Pedagogía socio-resiliente para poblaciones vulnerables del país: enfoques en contextos rurales y urbanos\*

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287818576.05>

**Yenni García Beltrán**

Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, D. C., Colombia

**Resumen:** Este capítulo analiza la pedagogía socio-resiliente como un enfoque educativo integral que busca fortalecer las capacidades adaptativas de los estudiantes en contextos rurales y urbanos vulnerables del país. Estas poblaciones han enfrentado múltiples problemáticas como la violencia armada, la desigualdad social, el abandono, la negligencia y el maltrato infantil, factores que generan profundas afectaciones en su desarrollo personal y académico. El estudio revisa el desarrollo histórico de la pedagogía social en América Latina y en el contexto nacional, destacando su papel como herramienta para la transformación social y educativa desde una perspectiva territorial. Asimismo, se examina el concepto de resiliencia educativa, sus características y su impacto en escenarios escolares adversos, donde la adversidad se convierte en el punto de partida para la potenciación de los recursos institucionales. La discusión plantea estrategias para la implementación de prácticas socio-resilientes que promuevan la integración, el bienestar emocional y la equidad.

**Palabras clave:** abandono escolar; brechas educativas; desigualdad social; pedagogía social; resiliencia educativa; violencia escolar.

---

\* Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación "Estrategia, identidad y cultura militar, impacto en la institucionalidad colombiana", del grupo de investigación Masa Crítica, reconocido y categorizado B por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y registrado con el código COL0123247, adscrito a la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". Los puntos de vista y los resultados de este capítulo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los de las instituciones participantes.

## Yenni García Beltrán

Doctora en Educación, Universidad Santo Tomás, Colombia. Magíster en Educación, Universidad Externado de Colombia. Especialista en Gerencia Educativa.

<https://orcid.org/0000-0001-5408-1094>

**Citación APA:** García Beltrán, Y. (2026). Pedagogía socio-resiliente para poblaciones vulnerables del país: enfoques en contextos rurales y urbanos. En O. O. Porras Rodríguez, A. Serrano Cuervo, & A. M. Núñez Henao (Eds.), *De la doctrina al aula. Educación militar en el siglo XXI, gestión del conocimiento y ética profesional en el contexto colombiano* (pp. 137-162) Sello Editorial ESDEG. <https://doi.org/10.25062/9786287818576.05>

## DE LA DOCTRINA AL AULA. EDUCACIÓN MILITAR EN EL SIGLO XXI, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ÉTICA PROFESIONAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

ISBN impreso: 978-628-7818-52-1

ISBN digital: 978-628-7818-57-6

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287818576>

### Colección Seguridad y Defensa

Sello Editorial ESDEG

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2026



## Introducción

La realidad social y educativa del país presenta profundas desigualdades estructurales que afectan de forma más intensa a las poblaciones rurales y urbanas en condición de vulnerabilidad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), más del 39 % de la población vive en situación de pobreza monetaria, con mayores índices en zonas rurales, donde la falta de acceso a servicios básicos, conectividad y una educación de calidad perpetúa ciclos de exclusión social. A esto se suma el impacto histórico de la violencia armada y el conflicto interno, que ha desplazado forzosamente a más de ocho millones de personas (Unidad para las Víctimas, 2024), muchas de las cuales son niños, niñas y adolescentes en edad escolar, cuyas trayectorias educativas se ven interrumpidas o fragmentadas.

En el ámbito psicosocial, el abandono, la negligencia y el maltrato infantil persisten como desafíos significativos. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2022), anualmente se registran más de 50 000 casos relacionados con la vulneración de derechos por violencia intrafamiliar, abuso y negligencia. Estas problemáticas, junto a las brechas existentes entre la educación pública y la privada, evidencian profundas desigualdades: mientras las instituciones privadas muestran mejores resultados en evaluaciones estandarizadas y acceso a tecnologías (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2023), numerosas escuelas públicas en zonas apartadas enfrentan carencias críticas en infraestructura. Esta disparidad afecta directamente la base de aspirantes de los centros de formación militar, quienes a menudo ingresan con trayectorias educativas fragmentadas y escuelas de vulnerabilidad que la instrucción tradicional no siempre alcanza a mitigar.

En este contexto, la integración educativa enfrenta obstáculos complejos. Las barreras arquitectónicas impiden la movilidad de estudiantes con discapacidad, mientras que la escasez de apoyos pedagógicos y currículos adaptados limita el

aprendizaje. Los prejuicios y estigmas sociales dificultan la integración; simultáneamente, la inestabilidad socioeconómica provoca ausentismo o deserción. Como señala Booth (2015), la integración no se reduce a la mera presencia física del estudiante en el aula, sino que implica garantizar la participación y el aprendizaje significativo. Bajo la perspectiva de Ainscow (2015), esto exige transformaciones profundas en la cultura escolar y las políticas públicas. Para los centros de formación castrense, el reto es doble: deben cumplir con la exigencia de la doctrina militar mientras adaptan sus entornos para acoger y nivelar a alumnos que provienen de estas realidades de exclusión.

En este escenario, la escuela se convierte en un espacio crucial para la reconstrucción del tejido social, ofreciendo no solo formación académica, sino apoyo emocional y contención afectiva. La pedagogía social, entendida como campo de educación que aborda problemáticas sociales (Caride, 2014), resulta esencial para articular acciones educativas con las necesidades del entorno. Esta perspectiva, que promueve procesos de integración comunitaria (Meira, 2014), reconoce que la educación es un acto de justicia social. En la educación militar, este enfoque permite transmutar la disciplina en un factor de resiliencia, donde el instructor actúa como referente de protección y el aula como laboratorio de estabilidad emocional.

Dentro de este marco, la pedagogía socio-resiliente surge como un enfoque integral que combina principios de la pedagogía social con la formación para la resiliencia, capacidad que permite a los individuos adaptarse ante la adversidad (Ungar, 2012). Este artículo explora la definición e impacto de esta pedagogía frente al problema central de la desatención a la salud mental y la falta de protocolos de acompañamiento socio-resiliente en los centros de formación militar. Se subraya la necesidad de políticas inclusivas (Torres, 2019) que reconozcan el trauma previo del alumno, evitando que la exigencia del servicio se convierta en un factor de revictimización. De este modo, se busca fortalecer la integridad del futuro oficial, asegurando que su formación técnica sea proporcional a su equilibrio humano y su capacidad de liderar en contextos de alta complejidad social.

## Marco teórico

### Definición de pedagogía social

La pedagogía social es una disciplina de las ciencias de la educación orientada a diseñar, implementar y evaluar procesos formativos que promuevan el desarrollo integral, la cohesión social y la participación ciudadana, especialmente en

contextos de vulnerabilidad (Caride & Meira, 2001; Petrus, 1997). Su ámbito de acción trasciende el aula escolar e incluye espacios comunitarios, institucionales y no formales, en los que se fomenta la construcción de entornos protectores y la garantía de derechos.

En este sentido, la pedagogía social puede comprenderse como un campo interdisciplinario que estudia y promueve procesos educativos dirigidos a la transformación social y a la integración de individuos en situación de vulnerabilidad (Caride & Meira, 2001; Petrus, 1997). Más allá de la instrucción formal, este enfoque incorpora el acompañamiento psicosocial, la participación comunitaria y la promoción de derechos, posibilitando una respuesta integral a las problemáticas que afectan el desarrollo individual y colectivo de quienes conforman la comunidad educativa. Así, la educación se concibe como un procedimiento contextualizado —donde la cultura, el entorno y las relaciones humanas juegan un papel fundamental— y orientado a formar ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa (Caride & Meira, 2014).

Es relevante resaltar que el abordaje de la pedagogía social en el país demanda una mirada crítica que reconozca tanto los desafíos estructurales como las posibilidades de transformación desde las comunidades mismas. Al integrar prácticas participativas y enfoques resilientes, se fortalece el rol de la escuela como agente de cambio, capaz de incidir en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de una ciudadanía activa y solidaria. Esta perspectiva invita a repensar las políticas educativas para que respondan de manera efectiva a la diversidad y complejidad de los contextos locales (CNA, 2020).

Según Hämäläinen (2015), la pedagogía social articula la teoría pedagógica con la intervención social, favoreciendo la integración de personas y grupos en riesgo de exclusión a través de metodologías participativas y un enfoque de justicia social. Su carácter interdisciplinario permite abordar de manera simultánea dimensiones cognitivas, afectivas y sociales, reconociendo la diversidad cultural y las particularidades del territorio.

En América Latina, el desarrollo de la pedagogía social ha estado estrechamente vinculado a los movimientos de educación popular y pedagogía crítica, inspirados en Paulo Freire (1970), quien planteó la necesidad de una educación liberadora capaz de cuestionar y transformar las estructuras que generan opresión. Este enfoque propicia un aprendizaje dialógico, en el que los sujetos son protagonistas activos de su procedimiento formativo. En el contexto nacional, la pedagogía social ha sido aplicada en programas de atención a víctimas del conflicto armado, procesos de reintegración social de excombatientes y formación

comunitaria en zonas rurales y urbanas vulnerables (Torres, 2019; MEN, 2023). Su implementación en entornos escolares implica la integración de contenidos académicos con acompañamiento psicosocial, reconociendo las historias de vida y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

La relevancia de la pedagogía social radica en su capacidad para responder a problemáticas complejas, tales como el abandono escolar, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y la desigualdad educativa. Al trascender la instrucción académica convencional, este enfoque fomenta procesos de resiliencia, empoderamiento y la construcción de proyectos de vida dignos<sup>1</sup> (Úcar, 2016). Bajo esta perspectiva, la intervención se centra en las potencialidades del individuo y no únicamente en sus carencias. Esta visión contribuye de manera directa a cerrar brechas sociales, fortaleciendo el capital humano y el tejido social de las comunidades, lo cual resulta estratégico en contextos de alta exigencia y vulnerabilidad.

## Resiliencia educativa: concepto y características

La resiliencia educativa se define como un proceso dinámico y relacional que faculta a estudiantes, docentes y comunidades para adaptarse y transformarse positivamente ante entornos de adversidad, tales como la violencia o la exclusión social (Henderson & Milstein, 2003). Desde esta perspectiva, la resiliencia trasciende la capacidad individual para entenderse como el resultado de la interacción entre las fortalezas personales y los recursos de apoyo disponibles en el ecosistema escolar (Bronfenbrenner, 1987).

Bajo este enfoque sistémico que resuena con la importancia que Senge (1990) otorga al aprendizaje continuo en las organizaciones, las instituciones educativas no solo actúan como centros de instrucción, sino como redes de protección que preservan el bienestar emocional y la participación social del individuo frente a las crisis.

Desde la perspectiva de la ecología social, la investigación contemporánea ha demostrado que la resiliencia no es un fenómeno extraordinario, sino que emerge de procesos ordinarios vinculados a los sistemas adaptativos humanos. Estos involucran tanto capacidades individuales como la regulación emocional y las habilidades cognitivas, así como la provisión estratégica de recursos por parte de la familia, la escuela y la comunidad. Al respecto, Ann Masten (2001) introdujo el concepto de *ordinary magic* (magia ordinaria)<sup>2</sup> para subrayar que la resiliencia

<sup>1</sup> Para una revisión profunda sobre la capacidad de la pedagogía social en la transformación de realidades complejas y la construcción de proyectos de vida, véase Úcar (2016), quien define la disciplina como un dinamizador de la autonomía y el bienestar social en entornos de vulnerabilidad.

<sup>2</sup> El concepto de Magia Ordinaria (Ordinary Magic) de Ann Masten sugiere que la resiliencia no requiere de cualidades heroicas o excepcionales. Por el contrario, es el resultado de la operación de sistemas de adaptación

emana de funciones humanas normales que pueden ser potenciadas mediante políticas públicas y prácticas educativas dirigidas.

Complementando esta visión, autores como Michael Ungar (2011) han enfatizado que la resiliencia tiene una carga profundamente contextual. En su enfoque, la disponibilidad, la accesibilidad y, especialmente, la adecuación cultural de los recursos externos son los factores que determinan si los individuos pueden hacer un uso efectivo de ellos para su recuperación y desarrollo (Ungar, 2011). Por lo tanto, la resiliencia debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el sujeto y su entorno social, y no como una carga exclusivamente individual.

En esta línea, comprender la resiliencia educativa desde la ecología social implica reconocer que el bienestar y la capacidad de adaptación no dependen únicamente de atributos individuales, sino que son fruto de la interacción constante entre los sujetos y sus entornos. Así, el fortalecimiento de la resiliencia escolar requiere estrategias que integren tanto el desarrollo de competencias personales como la creación de contextos seguros, inclusivos y culturalmente pertinentes. Al articular el aporte de la familia, la escuela y la comunidad en la provisión de apoyos y oportunidades, se promueve una respuesta integral que potencia la participación y el sentido de pertenencia de cada miembro. De este modo, la pedagogía social y la resiliencia educativa convergen en la construcción de entornos protectores y en el impulso de procesos formativos capaces de transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento colectivo (Huntington, 1957).

Desde la perspectiva de la ecología social, la investigación ha mostrado que la resiliencia emerge de procesos ordinarios —no sobrenaturales— que involucran sistemas adaptativos humanos (por ejemplo, regulación emocional, habilidades cognitivas) y la provisión de recursos por parte de la familia, la escuela y la comunidad (servidores sociales, políticas y servicios) (Masten, 2014). Ann Masten acuñó la idea de la *ordinary magic* para subrayar que la resiliencia proviene de funciones humanas normales que pueden fortalecerse mediante políticas y prácticas educativas (Masten, 2014). Michael Ungar y otros han enfatizado que la disponibilidad, accesibilidad y adecuación cultural de esos recursos determinan si los individuos pueden hacer uso efectivo de ellos (Ungar, 2018).

En esta línea, comprender la resiliencia educativa desde la ecología social implica reconocer que el bienestar y la capacidad de adaptación no dependen únicamente de atributos individuales, sino que son fruto de la interacción constante

---

básicos y comunes (como el apego, la inteligencia y la autorregulación) cuando estos encuentran un entorno de soporte adecuado. Su tesis principal es que, si estos sistemas normales están protegidos y estimulados, la mayoría de los individuos mostrarán resiliencia ante la adversidad.

entre los sujetos y sus entornos (Bronfenbrenner, 1979). Así, el fortalecimiento de la resiliencia escolar requiere estrategias que integren tanto el desarrollo de competencias personales como la creación de contextos seguros, inclusivos y culturalmente pertinentes (Masten, 2014). Al articular el aporte de la familia, la escuela y la comunidad en la provisión de apoyos y oportunidades, se promueve una respuesta integral que potencia la participación y el sentido de pertenencia de cada miembro (Ungar, 2018). De este modo, la pedagogía social y la resiliencia educativa convergen en la construcción de entornos protectores y en el impulso de procesos formativos capaces de transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento colectivo (Caride & Meira, 2014).

Según la ecología social, la resiliencia surge de procesos humanos adaptativos ordinarios y del acceso a recursos familiares, escolares y comunitarios (Masten, 2014). Ann Masten habla de la *ordinary magic*, resaltando que la resiliencia proviene de funciones normales que pueden fortalecerse con buenas políticas educativas. Michael Ungar destaca que para que los individuos aprovechen estos recursos, deben estar disponibles, accesibles y ser culturalmente adecuados (Ungar, 2018).

Comprender la resiliencia educativa desde la ecología social significa ver el bienestar y la adaptación como resultado de la interacción entre individuos y su entorno (Bronfenbrenner, 1979). Para fortalecerla, se requieren estrategias que combinen habilidades personales y contextos seguros e inclusivos (Masten, 2014). La colaboración entre familia, escuela y comunidad facilita apoyos integrales, promoviendo participación y pertenencia (Ungar, 2018). Así, pedagogía social y resiliencia educativa ayudan a crear ambientes protectores y procesos formativos que convierten la adversidad en crecimiento colectivo (Caride & Meira, 2014).

En este punto, resulta fundamental explorar el vínculo entre la pedagogía social y la resiliencia educativa, ya que ambas comparten el propósito de fortalecer capacidades individuales y colectivas frente a la adversidad y la exclusión social. El diálogo entre estos enfoques permite comprender cómo los procesos formativos y las redes de apoyo pueden potenciar la adaptación positiva y la transformación social en contextos educativos diversos (Janowitz, 1960).

La resiliencia educativa es mucho más que una estrategia académica; es la historia viva de estudiantes, docentes y familias que, frente a la adversidad, se sostienen y se reinventan juntos. Este procedimiento se arraiga en la capacidad colectiva de mirar de frente los retos —como la violencia, el desplazamiento o la pobreza— y hallar, paso a paso, caminos para recuperar el bienestar y la participación en comunidad. Lejos de ser un rasgo individual aislado, la resiliencia surge cuando los individuos encuentran apoyo en quienes les rodean y en los recursos

disponibles en su entorno, transformando lo cotidiano en oportunidades de aprendizaje y esperanza (Davenport & Prusak, 1998).

Es en esos vínculos —entre compañeras, docentes, madres, padres y agentes comunitarios— donde la magia ordinaria de la resiliencia se manifiesta. Políticas y prácticas educativas bien diseñadas pueden fortalecer estos lazos, ayudando a que la escuela sea un espacio seguro y protector, donde cada integrante se siente valorado y capaz de avanzar. Así, la resiliencia educativa no solo permite recuperarse ante una crisis, sino también crecer y construir juntos horizontes más justos e inclusivos (ONU, 2006).

## Dimensiones y criterios de la resiliencia educativa

La resiliencia educativa no debe entenderse como un atributo estático, sino como un constructo multidimensional que articula capacidades individuales con recursos sistémicos. A continuación, se explican las dimensiones centrales que estructuran este fenómeno:

- **Dimensión de adaptación positiva y transformación:** esta dimensión constituye el núcleo operativo de la resiliencia. Se manifiesta cuando los actores educativos (estudiantes, docentes y familias) logran sostener o recuperar su bienestar académico y socioemocional tras enfrentar eventos disruptivos. Según Masten (2014), la adaptación no es una simple resistencia pasiva, sino una capacidad de reinversión colectiva que permite transformar los retos —como el desplazamiento o la violencia— en oportunidades de crecimiento. El criterio de éxito aquí no es solo la supervivencia, sino la recuperación de la trayectoria de desarrollo del individuo.
- **Dimensión multinivel y sistémica:** la resiliencia se construye de manera relacional, rechazando la idea del esfuerzo individual aislado. Bajo este criterio, el bienestar del estudiante es el resultado de redes interconectadas que abarcan la familia, la escuela y el sistema educativo en su conjunto. Ungar (2018) sostiene que las intervenciones más eficaces son aquellas que actúan en múltiples niveles simultáneamente, reconociendo que la colaboración y el apoyo mutuo son los que permiten que el sujeto se sienta valorado y con agencia para avanzar.
- **Dimensión de factores protectores y apoyo psicosocial:** esta dimensión identifica los mecanismos que amortiguan el impacto de la adversidad. En el ámbito educativo, estos factores incluyen la autorregulación emocional, la autoestima y, fundamentalmente, la formación de vínculos de apego seguro con pares y docentes. Como indica Masten (2014), la presencia de estos

soportes pedagógicos y psicosociales es lo que posibilita la reconstrucción del sentido de propósito y la esperanza en la vida cotidiana de la institución.

- **Dimensión de pertinencia y contextualización cultural:** el criterio de contextualización establece que la resiliencia no es universal en su forma; su expresión depende de los valores, redes y prácticas específicas de cada territorio. Ungar (2018) enfatiza que las estrategias educativas carecen de efectividad si no se adaptan a la riqueza cultural de la comunidad. Por lo tanto, la resiliencia educativa exige reconocer la diversidad de voces y experiencias territoriales para dar un sentido real a la formación académica.
- **Dimensión de capacidades y resultados procesuales:** finalmente, esta dimensión equilibra la importancia de los resultados medibles (como la permanencia escolar) con los procesos internos de bienestar. Una política educativa resiliente prioriza el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la protección de los integrantes de la comunidad. Siguiendo a Masten (2014), el enfoque se desplaza de la carencia hacia la capacidad, apostando por la construcción de proyectos de vida dignos que trasciendan la emergencia inmediata.

En el ámbito escolar, el fortalecimiento de la resiliencia se operacionaliza a través de prácticas integrales que articulan el aprendizaje socioemocional (SEL) con sistemas de apoyo psicosocial (MHPSS/PSS). Estas intervenciones incluyen la formación docente para la atención de necesidades complejas, la creación de rutas de derivación institucional y la consolidación de redes de soporte comunitario mediante espacios seguros y proyectos culturales (INEE, 2010).

En el contexto colombiano, el MEN (2019) ha integrado estas estrategias en sus lineamientos de convivencia escolar, promoviendo una articulación entre la escuela y el hogar para mitigar conductas disruptivas. La evidencia técnica indica que estas acciones no solo mejoran el clima institucional, sino que impactan positivamente en la permanencia estudiantil y en los indicadores de aprendizaje, siempre que se vinculen con procesos de calidad pedagógica y un enfoque de bienestar integral (UNESCO, 2020).

En este sentido, la convergencia entre la perspectiva de ecología social y el marco normativo colombiano permite que la resiliencia en los centros de formación militar trascienda la respuesta ante la crisis para consolidarse como un eje de calidad institucional. Al integrar las Rutas de Atención Integral (RAI) establecidas por la Ley 1620 de 2013 con las capacidades de aprendizaje organizacional y los procesos de acreditación del Acuerdo 01 de 2025, se garantiza una formación que

no solo cumple con estándares técnicos de excelencia, sino que protege la integridad del ser humano detrás del uniforme (Congreso de la República de Colombia, 2013). Esta sinergia asegura que las competencias socioemocionales y la ética pública actúen como factores protectores dentro del currículo, transformando la disciplina en una herramienta de bienestar y adaptabilidad ante los complejos desafíos del entorno operacional (Consejo Nacional de Educación Superior, 2025).

Además, la consolidación de estas prácticas requiere un acompañamiento sistemático y la articulación con políticas públicas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Cuando la institución educativa asume un rol de eje coordinador entre los estudiantes, sus familias y la comunidad, se potencian las capacidades colectivas para afrontar la adversidad y transformar los entornos de aprendizaje (Masten, 2014). Según Bronfenbrenner (1987), esta sinergia entre los diferentes sistemas —microsistema familiar y mesosistema escolar— es lo que realmente favorece la permanencia y el éxito académico en contextos vulnerables.

Así, el fortalecimiento de la resiliencia no solo genera impactos inmediatos en el clima escolar y el bienestar socioemocional, sino que también contribuye a la construcción de proyectos educativos inclusivos y sensibles a la realidad de cada territorio. Este enfoque de pertinencia territorial coincide con los nuevos lineamientos de acreditación en Colombia, los cuales establecen que la alta calidad de una institución se mide por su capacidad de impactar positivamente en su entorno y promover el desarrollo humano integral de sus integrantes (Consejo Nacional de Educación Superior, 2025).

La consolidación de estas prácticas formativas requiere de un acompañamiento sistemático y de una articulación robusta con políticas públicas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Cuando la institución educativa asume un rol de eje coordinador entre los estudiantes, sus familias y la comunidad, se potencian las capacidades colectivas necesarias para afrontar la adversidad y transformar los entornos de aprendizaje (Masten, 2014). Al respecto, la teoría ecológica sostiene que la sinergia entre los diferentes sistemas —específicamente el microsistema familiar y el mesosistema escolar— es el factor que realmente favorece la permanencia y el éxito académico en contextos de alta vulnerabilidad (Bronfenbrenner, 1987).

Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la resiliencia no solo genera impactos inmediatos en el clima escolar y el bienestar socioemocional, sino que también contribuye a la construcción de proyectos educativos inclusivos y sensibles a la realidad de cada territorio. Este enfoque de pertinencia territorial guarda una estrecha coherencia con los nuevos lineamientos de acreditación en Colombia, los cuales establecen que la alta calidad de una institución se mide por su capacidad

de impactar positivamente en su entorno y por promover el desarrollo humano integral de todos sus integrantes (Consejo Nacional de Educación Superior, 2025). De esta manera, el modelo educativo trasciende la instrucción técnica para convertirse en un motor de transformación social y estabilidad institucional.

La experiencia colombiana demuestra que el fortalecimiento de la resiliencia educativa está estrechamente ligado a la integración de políticas públicas, el respaldo técnico y la participación de las comunidades. Las transformaciones más profundas no surgen de la atención inmediata, sino de aquellas acciones que impulsan redes de apoyo persistentes, la formación continua de los equipos escolares y la valorización de los saberes locales en los procesos pedagógicos. De este modo, se promueve la creación de ambientes protectores y el desarrollo de capacidades socioemocionales, elementos fundamentales para afrontar la complejidad de los territorios y avanzar hacia una formación transformadora (MEN, 2019).

En cuanto a las implicaciones para una pedagogía socio-resiliente, la integración de este enfoque requiere de una estrategia sistémica. En primer lugar, es necesario diagnosticar los recursos y brechas locales desde una mirada participativa. Seguidamente, se deben diseñar acciones escolares que combinen el aprendizaje socioemocional (SEL) con apoyos psicosociales y prácticas pedagógicas contextualizadas. Asimismo, resulta imperativo formar y proteger el bienestar del personal docente, articular la escuela con servicios de protección y consolidar sistemas de monitoreo que vinculen los indicadores de aprendizaje con el bienestar y la protección integral. Como indican las guías técnicas internacionales, la eficacia de estas prácticas depende de su adecuada contextualización cultural y de su sostenibilidad institucional (UNESCO, 2020).

Por otra parte, la implementación efectiva de una pedagogía socio-resiliente demanda un enfoque especial en fortalecer la participación de familias y actores comunitarios, además de la creación de espacios que valoren los saberes locales y fomenten prácticas de autocuidado colectivo. Es imprescindible que los equipos escolares dispongan de acompañamiento técnico y recursos suficientes para innovar en sus propuestas pedagógicas, generando ambientes de confianza que faciliten el diálogo abierto y la resolución colaborativa de los desafíos diarios. Asimismo, es relevante promover procesos de formación continua para docentes y líderes comunitarios, integrando herramientas para la gestión emocional y la intervención oportuna ante situaciones de riesgo. Solo de esta manera, la pedagogía socio-resiliente podrá transformarse en un motor educativo capaz de responder a la complejidad de los territorios y de cultivar comunidades escolares más cohesionadas, creativas y esperanzadas (Janowitz, 1960).

## Impacto de la pedagogía socio-resiliente en contextos rurales y urbanos vulnerables

En contextos rurales del país, la pedagogía socio-resiliente se ha orientado a enfrentar problemáticas estructurales tales como la dispersión geográfica de las comunidades, la precariedad en la infraestructura educativa, la escasez de materiales pedagógicos y las limitadas oportunidades de formación continua para el profesorado (MEN, 2020). Estas condiciones estructurales suelen agravarse por factores sociohistóricos persistentes, entre los que destacan el desplazamiento forzado, el abandono estatal y la erosión de las prácticas culturales autóctonas.

Ante este panorama, resulta imperativa la implementación de estrategias educativas contextualizadas que trasciendan la simple transmisión de contenidos académicos. Bajo el legado de la pedagogía crítica, se busca fortalecer las capacidades emocionales y sociales de estudiantes y familias, promoviendo una educación que actúe como práctica de la libertad y motor de transformación en territorios históricamente vulnerados (Freire, 1997). En coherencia con esta visión, la educación rural debe constituirse como un espacio de resistencia y construcción de paz, donde se reconozcan y pongan en valor los saberes locales frente a las dinámicas de exclusión (Torres, 2018).

En las zonas urbanas vulnerables, las problemáticas adquieren matices distintos: la violencia urbana, el microtráfico, la desintegración familiar, el trabajo infantil y la falta de espacios seguros para la infancia y adolescencia son factores que afectan la permanencia escolar y el rendimiento académico (González & López, 2021). En estos entornos, la pedagogía socio-resiliente ha demostrado ser una herramienta eficaz para generar entornos protectores y significativos, en los que el aprendizaje se vincula con la realidad inmediata del estudiante, favoreciendo la construcción de proyectos de vida alejados de la violencia.

En ambos escenarios, el impacto de la pedagogía socio-resiliente se refleja en indicadores como la mejora de la permanencia escolar, la reducción de la deserción y el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia la institución educativa (MEN, 2021).

## Estrategias fundamentales de la pedagogía socio-resiliente

Las prácticas más efectivas de la pedagogía socio-resiliente en contextos de vulnerabilidad privilegian enfoques que sitúan al estudiante en el centro del proceso educativo. Esta perspectiva favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la capacidad de agencia ante la adversidad (MEN, 2021). Para consolidar este flujo temático, se identifican dimensiones clave que articulan el saber académico con la realidad territorial.

En primer lugar, se implementan pedagogías participativas que otorgan protagonismo al estudiante en la construcción de su aprendizaje. Inspirada en las teorías socio-constructivistas, esta mirada reconoce la interacción social y el contexto como mediadores esenciales del desarrollo cognitivo y humano (Vygotsky, 1979). Complementariamente, la educación emocional se establece como un pilar fundamental orientado a la regulación y expresión constructiva de los sentimientos. A través de programas de educación emocional, se fortalecen la autoconciencia y la empatía, dotando al alumnado de herramientas para el manejo saludable de sus realidades cotidianas (Bisquerra, 2011).

En segundo lugar, la resiliencia se fortalece mediante la articulación con el entorno y el desarrollo de proyectos comunitarios. Esta vinculación con líderes y organizaciones locales permite ampliar las redes de apoyo y crear espacios seguros que trasciendan los muros de la escuela (Torres, 2018). Asimismo, la integración de saberes locales y ancestrales en el currículo refuerza la identidad cultural y el arraigo territorial. Este enfoque es fundamental para la construcción de proyectos de vida dignos, permitiendo que la educación sea un proceso de cuidado tanto del individuo como de su ecosistema social (Boff, 2015).

En definitiva, la pedagogía socio-resiliente representa una apuesta moral para la educación en contextos de vulnerabilidad. La evidencia sugiere que estas estrategias, cuando se implementan de manera sostenida, generan un círculo virtuoso donde la escuela se convierte en un núcleo de reconstrucción del tejido social, especialmente en territorios impactados por la pobreza y el conflicto (CEPAL, 2020). Avanzar en este camino implica un compromiso permanente de todos los actores para que la educación sea un proceso inclusivo, justo y capaz de generar oportunidades reales.

La implementación de una pedagogía socio-resiliente en los centros de formación de la Fuerza Pública no representa solo una innovación educativa, sino un imperativo estratégico para la seguridad humana y la integridad institucional. En estos escenarios, donde el personal se enfrenta de manera directa a la complejidad de los conflictos territoriales y a factores de estrés ocupacional extremos, la resiliencia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una competencia operativa fundamental. Al integrar el aprendizaje socioemocional, el respeto por los saberes locales y los mecanismos de apoyo psicosocial en el currículo militar, se garantiza que el futuro uniformado no solo reciba instrucción técnica y táctica, sino que desarrolle una estructura ética y emocional sólida. Esta formación integral permite que el personal actúe como un agente de reconstrucción del tejido social en los territorios más vulnerables, asegurando que la disciplina militar sea el soporte de una cultura de paz, legitimidad y protección de los derechos fundamentales del país.

## Factores psicosociales que afectan el aprendizaje

En contextos de vulnerabilidad social, los factores psicosociales inciden de manera directa y significativa en el rendimiento académico, la motivación y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Entre los más relevantes en el contexto nacional se encuentran (Huntington, 1957):

- **Desplazamiento forzado y migración interna:** la situación de desplazamiento, frecuente en zonas afectadas por el conflicto armado interno y la violencia sociopolítica, provoca rupturas en los vínculos comunitarios, desarraigo cultural y discontinuidad escolar (ACNUR, 2023). Los niños y adolescentes que viven este fenómeno enfrentan altos niveles de estrés postraumático, ansiedad y sentimientos de inseguridad, que interfieren en sus procesos de aprendizaje (González & Molina, 2021).
- **Violencia intrafamiliar y maltrato infantil:** la exposición constante a ambientes familiares conflictivos, caracterizados por agresiones físicas, verbales o psicológicas, impacta negativamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales, disminuye la autoestima y deteriora la capacidad de concentración (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Además, se asocia con mayores tasas de ausentismo escolar y comportamientos disruptivos en el aula.
- **Abandono y negligencia parental:** la ausencia de cuidados básicos, supervisión y acompañamiento escolar limita las oportunidades de aprendizaje autónomo y provoca sentimientos de desamparo y baja motivación. Este fenómeno es más frecuente en familias con precariedad económica, donde los padres deben priorizar la subsistencia sobre la atención educativa de sus hijos (Cepal, 2021).
- **Desigualdad social y brechas educativas:** las diferencias entre la educación pública y privada, junto con la falta de acceso a recursos tecnológicos, bibliográficos y espacios de aprendizaje adecuados, amplían la exclusión y perpetúan el ciclo de pobreza (PNUD, 2022). Esta desigualdad no solo es material, sino también simbólica, ya que las expectativas sociales y académicas suelen ser más bajas para estudiantes de sectores marginados.
- **Impacto emocional y cognitivo de la pobreza:** vivir en condiciones de pobreza prolongada genera un estado de estrés crónico que afecta funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la autorregulación y la toma de decisiones (Evans & Schamberg, 2009). Esto dificulta la adquisición de conocimientos y habilidades, aun en entornos educativos de calidad.

Ante estas realidades, la pedagogía socio-resiliente emerge como un enfoque integral que busca transformar las escuelas en entornos protectores, inclusivos y culturalmente pertinentes, donde los estudiantes puedan desarrollar competencias cognitivas y socioemocionales a pesar de las adversidades. Entre sus estrategias se destacan (Janowitz, 1960):

La operacionalización de este enfoque requiere acciones concretas que trasciendan la teoría. En primer lugar, es imperativa la incorporación de programas de educación emocional diseñados para fortalecer la autoconfianza y la regulación afectiva, elementos que constituyen la base del capital intelectual y humano en las organizaciones educativas (Davenport & Prusak, 1998). En segundo lugar, se debe fomentar la articulación con redes comunitarias y servicios sociales, garantizando una respuesta integral a las necesidades psicológicas y básicas de los estudiantes en consonancia con los marcos internacionales de protección de derechos (ONU, 2006).

Asimismo, la integración de saberes y prácticas locales en el currículo permite reforzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia, factores que la UNESCO (2017) considera críticos para la sostenibilidad de los proyectos educativos en territorios diversos. Finalmente, el uso de metodologías participativas y flexibles asegura que el proceso formativo se adapte a los distintos ritmos de aprendizaje y a las particularidades del contexto, tal como lo sugieren los lineamientos nacionales de convivencia y calidad (MEN, 2019).

En suma, comprender los factores psicosociales que afectan el aprendizaje no solo implica atender síntomas como el bajo rendimiento, sino transformar estructuralmente el entorno educativo. La relación entre la pedagogía social y la resiliencia educativa no es accidental: la primera provee el marco ético y metodológico para intervenir en contextos de exclusión (Caride & Meira, 2001), mientras que la segunda orienta las prácticas hacia la potenciación de capacidades protectoras (Ungar, 2012). Juntas conforman la pedagogía socio-resiliente, un enfoque inspirado en la educación liberadora que desplaza la atención del déficit hacia la valorización de los recursos personales e institucionales (Freire, 1970).

Esta perspectiva adquiere una relevancia singular en los centros de formación de la Fuerza Pública. En estos escenarios, la resiliencia no es solo una capacidad de recuperación personal, sino una competencia operativa que permite al personal militar gestionar el estrés del entorno operacional y actuar como un agente de cohesión social. Al profesionalizar la dimensión emocional y comunitaria, la institución no solo cumple con los estándares de alta calidad del Acuerdo 01 de 2025 del CESU, sino que fortalece su legitimidad y su compromiso con la protección integral de la sociedad.

## Desde el currículo: integrar saberes, emociones y contextos

La operacionalización de una pedagogía social efectiva requiere de un currículo contextualizado y pertinente que trascienda la estandarización. Este enfoque exige que el diseño curricular incorpore saberes locales, históricos y culturales —tales como la agroecología, los saberes ancestrales y la memoria del territorio— para garantizar que el aprendizaje sea significativo y responda a las realidades del entorno. Mientras que en contextos rurales esto se traduce en proyectos de gestión ambiental y producción local, en los entornos urbanos se orienta hacia la convivencia ciudadana y la economía familiar, consolidando la escuela como una “organización que aprende” de su propia comunidad (Senge, 1990).

Asimismo, es imperativo establecer el aprendizaje socioemocional (SEL) como un eje curricular transversal y no como un componente esporádico. La resiliencia educativa demanda espacios sistemáticos para la instrucción y el ejercicio de habilidades como la regulación emocional, la resolución de conflictos y la construcción de un sentido de propósito. Al integrar estas competencias en las horas pedagógicas de manera explícita, se dota al estudiante de herramientas protectoras fundamentales para afrontar la adversidad y participar activamente en la sociedad (Bisquerra, 2011).

Para sustentar esta estructura, se deben privilegiar metodologías activas y evaluaciones formativas que valoren los procesos de participación, colaboración y autocuidado. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la evaluación auténtica permiten itinerarios flexibles, fundamentales para estudiantes cuyas trayectorias han sido fragmentadas por el desplazamiento o la vulneración social. Esta flexibilidad curricular asegura que la evaluación no sea un mecanismo de exclusión, sino una ruta de recuperación y promoción formativa adaptada a las necesidades individuales (UNESCO, 2017).

Finalmente, la atención a la diversidad curricular se consolida mediante adaptaciones materiales, didáctica accesible y modalidades que reconozcan la heterogeneidad del aula. En territorios de alta dispersión geográfica, el uso de modelos pedagógicos flexibles y materiales diseñados para el contexto rural es imprescindible para garantizar la equidad. Estas acciones aseguran que el currículo funcione como un puente de inclusión, permitiendo que la oferta educativa sea pertinente y de alta calidad, independientemente de las condiciones sociohistóricas del territorio (MEN, 2020).

## Institucionalización de la respuesta socio-resiliente desde el PEI

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye la hoja de ruta de la escuela; Por lo tanto, para que la pedagogía socio-resiliente sea sostenible, debe plasmarse en

este documento mediante componentes operativos que trasciendan la teoría. Este proceso de institucionalización del conocimiento permite que la escuela gestione sus recursos de manera inteligente y estratégica (Davenport & Prusak, 1998). En este marco, el fortalecimiento institucional inicia con un diagnóstico participativo de vulnerabilidades y recursos, procedimiento que permite identificar de manera colectiva las fortalezas y necesidades reales de la comunidad escolar. Al integrar las voces de familias, docentes y aliados locales, la integración deja de ser una declaración formal para convertirse en una práctica cotidiana donde la diversidad es reconocida como motor de cohesión social (ONU, 2006).

Para que este diagnóstico se traduzca en cambios profundos, la misión y visión institucional deben fundamentarse en el respeto por los derechos y la resiliencia. Al posicionar estos principios como ejes vertebradores, la escuela se orienta hacia la creación de espacios seguros y democráticos donde cada estudiante es protegido frente a la exclusión. Esta visión se refleja en políticas escolares que garantizan la equidad y el desarrollo integral, transformando los enunciados abstractos en motores que fortalecen el sentido de pertenencia y la capacidad de respuesta ante la adversidad (UNESCO, 2017).

En consecuencia, la implementación transversal de estas políticas faculta a la institución para transitar de una respuesta reactiva hacia la construcción anticipada de entornos protectores y adaptativos. Este enfoque, respaldado por los lineamientos de convivencia nacional, promueve la permanencia escolar al brindar herramientas concretas para afrontar la crisis (MEN, 2019). Para asegurar su efectividad, es imperativo consolidar un plan de formación docente continuo basado en pedagogías informadas por el trauma. Este proceso debe incorporar espacios de apoyo psicosocial que refuercen el bienestar del profesorado, permitiéndoles identificar señales de sufrimiento emocional y actuar como mediadores resilientes en el aula.

Esta capacidad interna se potencia mediante la articulación intersectorial con servicios de salud y redes comunitarias, lo que facilita la derivación oportuna y el acceso a apoyos integrales. La gestión del conocimiento derivado de estas redes permite que la institución aprenda de su entorno y evolucione constantemente (Nonaka & Takeuchi, 1995). Finalmente, el monitoreo sistemático y la evaluación continua integrados en el PEI facilitan una cultura de mejora permanente basada en la evidencia. Al adoptar esta estructura, la escuela se posiciona como un agente transformador capaz de garantizar trayectorias educativas justas (Senge, 1990), alcanzando los altos estándares de calidad y el impacto medible exigidos por los marcos de acreditación (CNA, 2020).

En los centros de formación militar, la institucionalización de la resiliencia en el PEI adquiere una dimensión estratégica fundamental. La incorporación de estos

componentes operativos permite que la instrucción castrense no solo cumpla con la excelencia técnica y táctica, sino que se convierta en un modelo de profesionalización humana. Al integrar diagnósticos participativos y educación emocional en el currículo militar, se prepara a los futuros oficiales y suboficiales para gestionar la complejidad de los entornos operativos con inteligencia emocional y sensibilidad territorial. De este modo, la institución refuerza su legitimidad y asegura que sus integrantes sean capaces de liderar con resiliencia, protegiendo tanto su propio bienestar como el tejido social de las comunidades a las que sirven, cumpliendo así con la misión de ser referentes de alta calidad educativa y compromiso ético ante el país.

### Diferencias y respuestas en la educación rural y urbana

La implementación de estrategias socio-resilientes exige un reconocimiento profundo de las particularidades territoriales, dado que las brechas de vulnerabilidad se manifiestan de formas distintas según el entorno. En el contexto rural, los retos principales se concentran en la dispersión geográfica, la prevalencia de modelos multigrado y las limitaciones de infraestructura, factores que se entrelazan con la riqueza cultural de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ante esta realidad, las respuestas pedagógicas deben orientarse hacia la consolidación de escuelas comunitarias con currículos bilingües e interculturales, donde el cuerpo docente cuente con formación específica en pedagogía comunitaria. Estrategias como las rutas educativas móviles y los proyectos productivos escolares —vinculados directamente con la economía local— refuerzan el sentido de pertenencia y la permanencia estudiantil, permitiendo que la educación sea un motor de desarrollo sostenible en el territorio (MEN, 2020).

Por otro lado, en el contexto urbano vulnerable, los desafíos se desplazan hacia problemáticas como la violencia barrial, el desplazamiento interno, el trabajo infantil y el hacinamiento. En estos escenarios, la respuesta institucional debe posicionar a las escuelas como refugios seguros con horarios ampliados y programas de mediación para la prevención de la violencia. La efectividad de estas intervenciones depende de la capacidad de la escuela para tejer alianzas con organizaciones juveniles y centros comunitarios, implementando estrategias de detección temprana de riesgo y un acompañamiento psicosocial robusto que mitigue los impactos de la itinerancia laboral de las familias.

Aunque las problemáticas se manifiestan de manera diversa, las respuestas en ambos contextos comparten principios fundamentales de participación comunitaria, adaptación cultural y multinivelidad, integrando al individuo, la familia y la escuela en un mismo ecosistema adaptativo (Ungar, 2012). En este proceso, la

resiliencia escolar depende de manera crítica del capital humano; el docente trasciende el rol de transmisor de contenidos para convertirse en un mediador capaz de identificar señales de trauma y gestionar estrategias de aprendizaje socioemocional. En consecuencia, la sostenibilidad de cualquier enfoque socio-resiliente requiere de políticas que protejan el bienestar docente mediante ritmos laborales justos y apoyo psicosocial permanente, garantizando que el profesional de la educación cuente con los recursos necesarios para gestionar el conocimiento en entornos de alta complejidad (Davenport & Prusak, 1998).

Esta visión integradora resulta esencial para los centros de formación militar que operan en zonas de influencia rural y urbana. Al comprender estas dinámicas, la institución no solo mejora sus procesos de captación y formación de alumnos provenientes de dichos contextos, sino que prepara a sus futuros líderes para interactuar con la población civil de manera empática y estratégica. Así, el fortalecimiento de la resiliencia desde el currículo militar se alinea con los estándares de alta calidad y responsabilidad social, permitiendo que el egresado sea un agente de estabilidad y protección integral en cualquier escenario del territorio nacional.

## Integración, monitoreo y articulación intersectorial

La construcción de una cultura institucional inclusiva exige transitar de la simple tolerancia a una participación efectiva de todos los actores. Este proceso implica identificar y desmontar barreras comunes como los estigmas, los prejuicios y las prácticas evaluativas excluyentes, mediante procesos participativos de sensibilización y la implementación de ajustes razonables en materiales y accesibilidad física. En este marco, la resiliencia educativa actúa como un catalizador para la formación de redes protectoras que sostienen al estudiante más allá del espacio del aula (UNESCO, 2017). Para que estas transformaciones culturales sean sostenibles, es indispensable que las acciones orientadas a eliminar dichas barreras se articulen con sistemas efectivos de monitoreo y evaluación que permitan ajustar las estrategias según las realidades detectadas en el territorio (MEN, 2019).

En consecuencia, un enfoque socio-resiliente requiere de sistemas de información robustos que midan de manera equilibrada tanto los resultados académicos como los indicadores de bienestar. Esto incluye el seguimiento a las tasas de asistencia y permanencia, la aplicación de escalas de aprendizaje socioemocional (SEL) validadas y la medición de la percepción de seguridad institucional. Los datos obtenidos no deben considerarse cifras estáticas, sino evidencia crítica que alimente los ajustes necesarios en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este modelo de gestión basado en la evidencia es coherente con los lineamientos de

acreditación nacional, los cuales exigen que las instituciones demuestren un impacto social verificable y una capacidad de mejora continua en sus procesos de formación integral (Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2020).

Finalmente, la información recabada constituye la base para diseñar políticas y propuestas operativas que respondan a los desafíos identificados. La capacidad de traducir las necesidades del entorno en acciones concretas fortalece la autonomía escolar y permite avanzar hacia una educación más resiliente y adaptada a la diversidad (Nonaka & Takeuchi, 1995). No obstante, para que estas implicaciones tengan un impacto real en territorios complejos, es fundamental promover la articulación intersectorial entre salud, bienestar social, justicia y protección infantil. Esta cooperación interinstitucional facilita el acceso a servicios complementarios y una respuesta rápida ante situaciones de vulneración. Solo mediante marcos normativos claros y un compromiso coordinado de diferentes actores es posible transformar la escuela en una "organización inteligente", capaz de generar oportunidades significativas para todo el alumnado (Senge, 1990).

Esta visión de articulación y monitoreo resulta vital para los centros de formación de la Fuerza Pública. La integración de indicadores de bienestar psicosocial en el seguimiento de los alumnos permite prevenir la deserción y fortalecer la salud mental de los futuros oficiales y suboficiales. Al coordinarse con entidades externas de protección y salud, la institución no solo optimiza sus recursos, sino que consolida un modelo de educación superior de alta calidad que responde a los estándares de responsabilidad social y excelencia humana que el país demanda.

### Propuestas operativas para la institucionalización de la resiliencia

La transformación de los entornos educativos en espacios de alta calidad y resiliencia requiere, en primera instancia, la incorporación del aprendizaje socioemocional (SEL) y la educación para la paz como ejes transversales del currículo. Esta integración no debe limitarse a contenidos teóricos, sino que debe traducirse en horas y objetivos claros que promuevan la resolución pacífica de conflictos y la convivencia democrática. Para los centros de formación militar, esta propuesta es de vital importancia, ya que permite que el futuro oficial o suboficial desarrolle una gestión emocional robusta, esencial para el liderazgo en escenarios de crisis (Janowitz, 1960). Al garantizar la formación sistemática del profesorado en estas competencias, el aprendizaje trasciende lo académico y se convierte en una herramienta operativa que potencia la resiliencia individual y colectiva dentro de la institución castrense.

En estrecha relación con lo anterior, resulta imperativo revisar y actualizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para que incluya diagnósticos de riesgo, protocolos de actuación y planes de formación docente en pedagogía socio-resiliente.

Esta actualización debe concebirse como un ejercicio de gestión del conocimiento que asegure que las rutas de atención intersectoriales y los mecanismos de vigilancia temprana sean plenamente operativos (Davenport & Prusak, 1998). En el ámbito militar, esto implica adaptar las evaluaciones formativas a las trayectorias de los alumnos, reconociendo que muchos de ellos provienen de territorios con experiencias de vulnerabilidad o educación fragmentada. De este modo, la flexibilidad y la equidad se consolidan como principios que enriquecen la propuesta pedagógica y dotan a la institución de una mayor capacidad de respuesta ante la diversidad de su alumnado.

Asimismo, la arquitectura de esta educación debe sustentarse en el diseño de rutas de atención intersectoriales que faciliten la intervención coordinada entre la escuela, las autoridades locales y los servicios de protección social (ONU, 2006). La integración de estos mecanismos permite detectar riesgos de manera eficiente y promover la participación comunitaria mediante el reconocimiento de saberes locales en los contenidos escolares. En los centros de formación militar, este vínculo con el territorio no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que fortalece la identidad institucional y el arraigo cultural. Al implementar evaluaciones formativas y trayectorias flexibles, se asegura una visión completa del desarrollo del estudiante, permitiendo que la educación responda eficazmente a las necesidades de comunidades heterogéneas (UNESCO, 2017).

Finalmente, la sostenibilidad de este modelo depende de la creación de sistemas de monitoreo que combinen indicadores académicos y de bienestar. La recopilación sistemática de datos sobre el rendimiento escolar, el estado emocional y el grado de cohesión social permite identificar áreas de mejora y anticipar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en deserciones (MEN, 2019). Este enfoque, alineado con los estándares de alta calidad, promueve una cultura institucional que valora la diversidad y garantiza el acceso a oportunidades de desarrollo integral (CNA, 2020). Al consolidar el uso de tecnologías para la comunicación entre los actores implicados, la institución se posiciona como un motor de protección. En definitiva, la colaboración sostenida y la innovación pedagógica permiten que la escuela militar forme líderes capaces de reconstruir el tejido social (Nonaka & Takeuchi, 1995), consolidando organizaciones inteligentes que abren nuevas oportunidades para el desarrollo del país (Senge, 1990).

## Conclusiones

La pedagogía social constituye un pilar para la reconstrucción del tejido social en contextos vulnerables, pues la escuela, en zonas rurales y urbanas afectadas por la desigualdad estructural, la violencia armada y la precariedad socioeconómica, no puede limitarse a la transmisión de contenidos académicos. Debe asumir un rol activo como espacio de protección, integración y desarrollo integral. La pedagogía social, al priorizar la intervención educativa en contextos de riesgo y exclusión, ofrece herramientas para acompañar a los estudiantes en su desarrollo personal y comunitario, generando entornos de confianza y fortaleciendo la cohesión social (Bisquerra, 2011).

Para avanzar hacia una escuela resiliente, es indispensable crear mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan ajustar las estrategias implementadas en función de los resultados y las necesidades emergentes. La integración de herramientas tecnológicas puede facilitar la recopilación de datos relevantes, así como la comunicación entre los diferentes agentes implicados. Igualmente, resulta esencial fomentar una cultura institucional que valore la diversidad y promueva la equidad, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su contexto, tengan acceso a oportunidades de desarrollo integral (ONU, 2006). En la educación militar, este pilar es fundamental para que los centros educativos castrenses actúen como ejes de legitimidad y protección de los derechos humanos en territorios críticos.

La resiliencia educativa debe integrarse como eje transversal en el currículo y en el PEI, entendiendo que el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la gestión de la adversidad y la capacidad de recuperación ante eventos traumáticos no pueden quedar como actividades extracurriculares o esporádicas. Deben incorporarse explícitamente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en los planes de estudio, con objetivos claros, metodologías activas y evaluación formativa (Davenport & Prusak, 1998). Esto es particularmente urgente en comunidades escolares que han vivido desplazamiento, pobreza extrema, discriminación o violencia. Para lograr este propósito, resulta imprescindible fortalecer la colaboración entre los diferentes sectores sociales, incluidos salud, protección infantil y servicios comunitarios, garantizando una respuesta integral ante los retos que enfrenta la escuela.

Además, se deben establecer canales de comunicación permanentes entre equipos docentes, familias y actores institucionales, lo que permitirá anticipar problemas y responder oportunamente a las necesidades emergentes. El desarrollo de capacidades en gestión emocional y resolución de conflictos, tanto en estudiantes como en el personal educativo, será fundamental para afianzar entornos

escolares seguros y resilientes (UNESCO, 2017). Para el personal militar en formación, esta resiliencia es una competencia operativa que les permitirá liderar bajo presión y gestionar el estrés del entorno operacional con inteligencia emocional.

Existen brechas significativas entre la educación rural y urbana que condicionan la implementación de la pedagogía social, pues mientras en zonas urbanas es más factible el acceso a programas de apoyo psicológico y capacitación docente, en zonas rurales las carencias de infraestructura y la escasez de educación continua dificultan estas estrategias (MEN, 2019). Esto obliga a diseñar políticas diferenciadas, con planes de acción contextualizados y participación de la comunidad. Para abordar estas diferencias, es indispensable impulsar iniciativas que promuevan la equidad territorial, garantizando recursos adicionales y adaptando la educación docente a las particularidades de cada entorno. Resulta fundamental involucrar a las autoridades locales y a las organizaciones comunitarias en la identificación de necesidades y en la elaboración de propuestas que respondan a los retos específicos de cada comunidad, fomentando así la sostenibilidad y el arraigo de las intervenciones (Nonaka & Takeuchi, 1995). En este sentido, los centros de formación militar deben adaptar sus procesos de selección e instrucción para reconocer y potenciar el capital cultural de los alumnos provenientes de la ruralidad dispersa.

El currículo debe evolucionar hacia un modelo integral que vincule el aprendizaje académico con la educación socioemocional y ciudadana, reconociendo que la instrucción de competencias cognitivas no es suficiente para garantizar la integración ni el bienestar estudiantil. La incorporación de la pedagogía social implica revisar los contenidos para incluir proyectos de vida, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de la empatía como componentes permanentes (Senge, 1990). Este modelo debe contemplar la transversalización de valores democráticos, el fomento del pensamiento crítico y la promoción de la participación del alumnado en la vida escolar y comunitaria. Asimismo, es indispensable que los proyectos pedagógicos incluyan actividades que conecten el aprendizaje con la realidad social del entorno, favoreciendo la solidaridad y el compromiso ciudadano desde edades tempranas (Ungar, 2012). En las escuelas militares, esta evolución asegura que los oficiales no solo sean expertos tácticos, sino líderes éticos con una profunda comprensión de la realidad social del país.

La participación de las familias y la comunidad es indispensable para consolidar procesos resilientes, ya que la resiliencia educativa no se desarrolla de manera aislada en el aula; requiere una alianza estrecha entre docentes, líderes comunitarios e instituciones estatales. Las estrategias pedagógicas deben contemplar espacios de educación y diálogo con padres de familia, así como actividades

comunitarias que fortalezcan redes de apoyo y promuevan un sentido de pertenencia (Davenport & Prusak, 1998). La implicación activa de las familias y los diferentes agentes comunitarios fortalece la creación de redes de apoyo que contribuyen al desarrollo integral del alumnado. Es fundamental promover espacios de encuentro y colaboración donde se compartan experiencias, se detecten problemáticas y se elaboren soluciones conjuntas, favoreciendo así la corresponsabilidad en el procedimiento educativo. De este modo, la comunidad educativa se convierte en un entorno protector y facilitador del bienestar y la resiliencia, capaz de responder de manera flexible y creativa ante las adversidades (ONU, 2006).

Es urgente fortalecer la educación docente en pedagogía social y resiliencia, pues la implementación de este enfoque exige que los educadores desarrollen competencias en intervención psicosocial, mediación de conflictos y acompañamiento emocional (UNESCO, 2017). Sin esta preparación, las políticas educativas y los lineamientos curriculares difícilmente tendrán un impacto real en las aulas. En este sentido, para que los docentes puedan responder de manera efectiva a los retos derivados de la exclusión, es fundamental implementar programas de educación continua que aborden el manejo de situaciones traumáticas y el desarrollo de competencias para facilitar ambientes seguros. Además, la actualización permanente permitirá a los educadores adaptarse a los cambios sociales y brindar respuestas pertinentes a las necesidades de sus estudiantes (CNA, 2020). Esta conclusión es de vital importancia para los centros de formación militar, donde el instructor debe estar capacitado para formar en la disciplina sin descuidar el bienestar psicosocial y la salud mental de los alumnos bajo su mando.

## Referencias

- ACNUR. (2024, 25 de abril). *La IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 sobre condiciones de vida y derechos de la población desplazada del país*. ACNUR.
- Bello, M. N. (2004). El desplazamiento forzado del país: Acumulación de capital y exclusión social. En M. N. Bello (Comp.), *Desplazamiento forzado: Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo* (pp. 19–34). Universidad Nacional del país / ACNUR.
- Caride, J. A., & Meira, P. A. (2001). *Educación ambiental y desarrollo humano*. Ariel.
- CEPAL. (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Naciones Unidas.
- Evans, G. W., & Schamberg, M. A. (2009). Childhood poverty, chronic stress, and adult working memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(16), 6545–6549. <https://doi.org/10.1073/pnas.0811910106>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- González, L., & Molina, R. (2021). Efectos psicosociales del desplazamiento forzado en niños y adolescentes. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 53(1), 1–15. <https://doi.org/10.14349/rlp.2021.v53.1>
- Hämäläinen, J. (2015). Defining social pedagogy: Historical, theoretical and practical considerations. *British Journal of Social Work*, 45(3), 1022–1038. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bct174>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2022). *Informe anual de vulneración de derechos*. ICBF.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227>
- Ministerio de Educación Nacional. (2020). *Educación rural en el país: Retos y perspectivas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Informe de permanencia escolar*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2023). *Informe de gestión educativa en contextos de vulnerabilidad*. MEN.
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Violencia contra los niños*. OMS.
- Petrus, A. (1997). *Pedagogía social*. Ariel.
- Torres, A. (2019). La pedagogía social como herramienta de inclusión en el país. *Revista Colombiana de Educación*, (76), 45–68. <https://doi.org/10.17227/rce.num76-7880>
- Úcar, X. (2016). *Pedagogía social: Fundamentos y prácticas*. Editorial UOC.
- Ungar, M. (Ed.). (2012). *The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice*. Springer.